



Poder Judicial de la Nación

**LEGAJO DE APELACIÓN DE C. G. M. FORMADO EN LA CAUSA N° FSM 45004687/2011/3/CA1, CARATULADA: “M., C. G. Y OTROS SOBRE INFRACCIÓN ARTÍCULO 303 DEL CÓDIGO PENAL”.**

FSM 45004687/2011/3/CA1, Orden N° 35.433. Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 7, Secretaría N° 13. Sala “A”.

Buenos Aires, de mayo de 2026.

**VISTOS:**

El recurso de apelación interpuesto por la defensa de C. G. M., contra los puntos dispositivos I y II de la resolución por la cual el señor juez a cargo del juzgado “*a quo*” dictó el auto de procesamiento, sin prisión preventiva, del nombrado por considerarlo “*prima facie*” autor del delito tipificado por los arts. 303 inc. 1°, y 304 del C.P. y por la que se ordenó trabar un embargo sobre los bienes de aquél hasta cubrir la suma de cien millones de pesos (\$ 100.000.000).

El memorial por el cual la defensa de C. G. M. informó en los términos del art. 454 del C.P.P.N.

**Y CONSIDERANDO:**

1°) Que, por la resolución recurrida, el juzgado “*a quo*” dictó el auto de procesamiento, sin prisión preventiva, de C. G. M., en orden a los delitos previstos por los artículos 303, inc. 1° y 304 del Código Penal, atribuyéndole el carácter de autor conforme lo establecido por el artículo 45 del mismo cuerpo legal.

Para decidir de esa manera, el señor juez a cargo del juzgado de la instancia anterior consideró que existían elementos de convicción suficientes para tener por acreditado que C. G. M. habría intervenido en la introducción en el circuito financiero, para darle apariencia lícita, de sumas de dinero provenientes de facturación presuntamente apócrifa, mediante la puesta en circulación en el mercado de una suma superior a los \$ 88.283.933, a través de la estructura bancaria y financiera de la sociedad V. F. S.A.

Asimismo, por la decisión recurrida, se expresó que la sociedad V. F. S.A. “...*fue constituida irregularmente, mediante la utilización de un*



*documento de identidad falso a nombre de L. C....la cual no tendría una actividad económica real...” y que los fondos aludidos precedentemente “...provenirían de usinas de facturación apócrifa, las cuales transferían las sumas obtenidas producto de la emisión de facturas comerciales presuntamente falsas (material o ideológicamente...) a distintas cuentas bancarias de V. F. S.A.”.*

En particular, se indicó por el pronunciamiento en cuestión que C. G. M. era el titular de la dirección IP registrada en el domicilio que el nombrado M. alquilaba, desde la cual se ingresó a la C.U.I.T. del denunciante L. C., que M. habría intervenido, en su calidad de contador público en la suscripción de un balance comercial de la contribuyente V. F. S.A. y que, por otro lado, en el Banco de la Nación Argentina, se registró como contacto para la atención de la cuenta corriente de titularidad de la contribuyente antes referida la línea telefónica N° \*\*\*\*-\*\*\*\*, que se encontraría vinculada al nombrado M..

A partir de esto, se concluyó que “...el nombrado se encontraba vinculado activamente con la dirección y manejo de la sociedad, siendo la persona a la cual se le debía consultar por temas vinculados con la cuenta corriente bancaria titularidad de la sociedad mencionada...”, como así también que C. G. M. “...tuvo un conocimiento cabal de que ‘V. F. S.A.’ era una sociedad sin actividad comercial real alguna, y que las operaciones comerciales que se registraban no se habían concretado efectivamente, emitiéndose facturas comerciales presuntamente apócrifas; y, en consecuencia, que el dinero canalizado a través de la estructura bancaria y financiera que la sociedad ‘V. F. S.A.’ poseía en el circuito financiero, proveniente de un ilícito penal, habría adquirido apariencia de un origen lícito y circulaba en el mercado...”.

Por la resolución en examen, se ordenó también trabar un embargo sobre los bienes de C. G. M. hasta cubrir la suma de cien millones de pesos (\$ 100.000.000).

2º) Que, por el recurso de apelación interpuesto y por el memorial presentado en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N., la defensa de C. G. M. se agravió de la resolución reseñada precedentemente, por considerar que la misma contiene una “...fundamentación aparente por la arbitrariedad que impregna...”, y





## Poder Judicial de la Nación

sostuvo que la decisión se adoptó prematuramente, agraviándose también de la falta de producción de las medidas que solicitó como evacuación de sus citas de descargo.

Asimismo, la defensa argumentó que los montos involucrados en el caso, “...se encuentran por debajo del umbral punitivo establecido por la Ley 27739...” por lo que, a entender de esa parte, la misma resultaba de aplicación por tratarse de una ley penal más benigna.

Además, la defensa sostuvo la ajenidad de su defendido en las maniobras al indicar que “...no existe una sola evidencia de la intervención...directa ni indirecta de M. en ninguna de dichas acciones. No percibió dinero alguno, no intervino ni tiene relación con las personas físicas o jurídicas que depositaron los cheques en las cuentas de V. F., no cobró ningún cheque que supuestamente se intentó blanquear... no tiene vinculación con ninguna de las personas físicas o jurídicas intervinientes en la facturación estimada apócrifa...” (se prescinde del resaltado original).

Indicó también que el imputado C. G. M. “...ha explicado su relación puramente profesional en el marco de su estudio contable y ha ofrecido probar sus dichos. La instrucción se lo impide...Su actuación puramente en el marco de su profesión y sin relación a movimientos económicos de la firma, fue muy anterior a los períodos investigados” (se prescinde del resaltado original).

Se agravió también del monto del embargo fijado por considerar que “...su determinación, carece de parámetro objetivo que permita apreciar la razonabilidad de la abultada suma presupuestada...”.

3º) Que, dado que constituyen cuestionamientos que, de prosperar, tornarían innecesario ingresar al examen de los agravios relacionados con el fondo del asunto, corresponde tratar con antelación a aquellas cuestiones, la argumentación de la defensa de C. G. M. tendiente a descalificar el auto de procesamiento mencionado por el considerando 1º de la presente como acto jurisdiccional válido, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad y/o por el incumplimiento supuesto de pautas procesales que vulnerarían los derechos constitucionales de defensa en juicio y debido proceso.

Corresponde expresar al respecto, que el postulado rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de los actos y la interpretación de la existencia de aquéllas es restrictiva (confr. art. 2º del C.P.P.N.) y sólo procede la declaración de la nulidad cuando por la



violación de las formalidades resulta un perjuicio real, actual y concreto para la parte que la invoca, y no cuando se plantean en el único interés de la ley o para satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial (confr. CPE 1561/2018/67/89/CA38, res. del 30/08/2019, Reg. Interno N° 601/19 y CPE 1016/2017/20, res. del 16/3/2022, Reg. Int. N° 114/22, de esta Sala “A” y Regs. Nos. 367/00, 671/00, 533/07, 587/10 y 159/2015, entre muchos otros, de la Sala “B” de esta Cámara).

4º) Que, asimismo, este Tribunal ha establecido con anterioridad que, sin perjuicio de la exigencia genérica de fundamentación de los autos que se dispone por el art. 123 del C.P.P.N., por el art. 308 del mismo cuerpo legal se establecen, específicamente, las formas que deben observarse para la validez de un auto de procesamiento (confr. Reg. N° 379/11, 63/12 y 712/13, entre otros, de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 1002/2016/236/CA53, res. del 30/07/2019, Reg. Interno N° 552/19, de esta Sala “A”).

Por lo tanto, es útil poner de relieve que, por el pronunciamiento cuestionado, se consignaron los datos personales del imputado, se realizó una mención de lo manifestado por aquél al prestar la declaración indagatoria, se expresaron los motivos por los cuales se dictó la decisión impugnada, se efectuó una descripción detallada de los hechos investigados y se indicó la calificación legal “*prima facie*” atribuible a aquéllos, con cita de las disposiciones legales que se consideraron aplicables.

En consecuencia, corresponde establecer que toda vez que por la resolución recurrida se observaron las previsiones del art. 308 del C.P.P.N., los agravios de la defensa de C. G. M. no tendrán una recepción favorable.

5º) Que, en efecto, se advierte que la arbitrariedad señalada por la defensa de C. G. M. sólo constituye una discrepancia con los criterios vinculados con la cuestión debatida en este incidente y con las conclusiones a las cuales se arribó por la resolución recurrida, sin que por aquella circunstancia se encuentre mérito suficiente para declarar la invalidez del auto examinado.

6º) Que, las diferencias de criterio que tengan las partes con relación a la fuerza o al alcance probatorio de los elementos incorporados al





## Poder Judicial de la Nación

legajo y a la idoneidad de éstos para generar la convicción suficiente que se exige para el dictado del auto de procesamiento (art. 306 del C.P.P.N.), pueden constituir materia de la discusión central del trámite del recurso de apelación, pero no implican la invalidez de la resolución recurrida, en los casos -como el que se presenta en el “*sub lite*”- en los cuales la resolución impugnada cumple con los requisitos de motivación que se prescriben por la ley procesal vigente (confr. Regs. Nos. 923/03, 602/15, 72/16 y CPE 1132/2019/5/CA3, res. del 2/09/2019, Reg. Interno N° 621/19, entre muchos otros, de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 385/2019/2/CA2, res. del 23/12/2019, Reg. Interno N° 854/19 de esta Sala “A”).

Asimismo, para que la nulidad de una resolución se produzca por causa de vicios en la fundamentación, aquélla debe contener omisiones sustanciales de motivación; o resultar contradictoria, o arbitraria por apartamiento de las reglas de la sana crítica, de la lógica, de la experiencia o del sentido común; o estar basada en apreciaciones meramente dogmáticas. Contrariamente a lo afirmado por la parte recurrente, estos defectos no se advierten en la resolución recurrida, que ofrece una motivación suficiente de lo decidido.

Por lo tanto, corresponde establecer que, en el caso, se observaron las previsiones del art. 308 del C.P.P.N. y que el agravio formulado por la defensa del imputado, sólo constituye una discrepancia con los criterios vinculados con la cuestión de fondo debatida en los autos principales y con las conclusiones a las cuales se arribó por la resolución apelada, sin que por aquella circunstancia se encuentre mérito suficiente para declarar la invalidez del auto de procesamiento examinado.

7º) Que, asimismo, con relación al agravio del recurrente vinculado con una supuesta omisión de evacuar las citas introducidas por C. G. M. en su descargo, corresponde expresar que por la normativa legal vigente, los jueces no están obligados, en la etapa de instrucción, a referirse a todos y a cada uno de los elementos de prueba incorporados al legajo, ni a tratar todos los argumentos ofrecidos como descargo por los imputados, ni a disponer la producción de todas las medidas de prueba solicitadas por aquéllos, sino sólo las que se estimen pertinentes a fin de “...*comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad (art. 193 del C.P.P.N.)...*” (confr. Regs. Nos. 633/01, 981/01, 598/04, 813/10 y 63/12, entre otros, de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 943/2010/25/CA5, res. del 01/07/2020, Reg. Interno N°



177/20 y CPE 1208/2022/30/CA7, res. del 18/10/2023, Reg. Interno N° 477/23, de esta Sala “A”).

Esto es así, pues “...la actividad del juez es técnicamente discrecional, queriéndose significar con ello que, a diferencia de lo que ocurre durante el plenario -el juicio oral-, está concentrada sólo en las disposiciones del instructor...Es que la pertinencia de la prueba, calificándola como necesaria a los fines de la investigación, incumbe sólo al juez (CS Fallos 247:214). Resulta del carácter escasamente contradictorio de esta etapa...” (confr. Reg. N° 136/12; CPE 237/2013/7/RH1, res. del 8/09/2015, Reg. Interno N° 385/15; CPE 1674/2014/1/RH1, res. del 6/06/2016, Reg. Interno N° 266/16; CPE 759/2016/1/RH1, res. del 9/03/2017, Reg. Interno N° 115/17 y CPE 27/2019/10/RH1, res. del 14/03/2019, Reg. Interno 130/19, entre otros, de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 1002/2016/43/2/RH64, res. del 29/09/2022, Reg. Interno N° 463/22 de esta Sala “A”).

8º) Que, con relación a la cuestión de fondo corresponde establecer que por ninguno de los argumentos invocados por la defensa de C. G. M. por el recurso de apelación interpuesto y por el memorial presentado en los términos del art. 454 del C.P.P.N., se han desvirtuado los fundamentos expresados por la resolución recurrida, los cuales resultan acordes con las constancias que actualmente se encuentran agregadas a la causa principal a la cual pertenece el presente incidente.

En efecto, los cuestionamientos que la defensa de C. G. M. efectuó sobre la entidad convictiva de los elementos de prueba incorporados a las actuaciones, parten de un análisis aislado de cada elemento, sin apreciar a aquéllos en conjunto.

Aquel análisis parcial no resulta admisible, pues la eficacia de las presunciones que podrían derivar de cada elemento de prueba depende de la valoración conjunta que se efectúe de aquéllos teniendo en cuenta la diversidad, la correlación y la concordancia de los mismos, pero no de un tratamiento particular y aislado, toda vez que, por su misma naturaleza, cada uno de los indicios no puede llegar a fundar aisladamente ningún juicio de convicción, el cual deriva de la pluralidad y concordancia de aquéllos (confr. Fallos 300:928, Reg. N° 360/13 de la Sala “B” de esta Cámara; CPE 1561/2018/67/105/CA55, res. del 08/10/2019, Reg. Interno N° 684/19 y CPE 1913/2019/5/CA1, res. del 18/02/2020, Reg. Interno N° 46/20 de esta Sala “A”).





## Poder Judicial de la Nación

Como se ha establecido por pronunciamientos anteriores, “...la totalidad de los elementos probatorios arrimados al expediente debe ser objeto de una valoración articulada, contextual y conjunta dentro del plexo probatorio, el cual, evaluado en un acto único y con ajuste a la sana crítica racional, posibilita la obtención de una acabada constatación de los hechos investigados. El mero análisis parcializado de los elementos de prueba incorporados al proceso impide la comprensión global del hecho de que se trata...” (confr. Regs. Nos. 879/03, 785/10 y 360/13 de la Sala “B” de esta Cámara; CPE 1561/2018/67/105/CA55, res. del 08/10/2019, Reg. Interno N° 684/19 y CPE 1913/2019/5/CA1, res. del 18/02/2020, Reg. Interno N° 46/20 de esta Sala “A”, entre otros).

En el caso, contrariamente a lo argumentado por la parte recurrente, se advierte que los elementos de prueba incorporados a la causa principal, valorados de manera conjunta de acuerdo con lo expresado por los párrafos que anteceden, constituyen un cuadro probatorio idóneo y suficiente para sustentar, con el alcance exigido por el art. 306 del C.P.P.N., que C. G. M. habría tenido una intervención penalmente relevante en los hechos de que se trata.

9º) Que, por la consideración 17º de la resolución recurrida el señor juez “a quo” estimó acreditado, y no ha sido controvertido por la parte recurrente, que:

a) la sociedad V. F. S.A. fue constituida de manera irregular mediante la utilización de un documento de identidad expedido a nombre de L. C..

Cabe recordar que L. C. fue la persona que denunció oportunamente ante la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional de Morón, provincia de Buenos Aires (donde oportunamente tuvieron inicio las actuaciones principales a las que corresponde este legajo), que en ocasión de presentar la declaración jurada de bienes personales ante A.R.CA., tomó conocimiento que existía una persona registrada en el sistema del organismo recaudador con su nombre, dirección y D.N.I., pero con otra foto y huella dactilar, y le fue informado además que bajo sus datos, existían registradas otras empresas, respecto de las cuales negó todo tipo de vinculación, entre las cuales se encontraba V. F. S.A. (confr. fs. 2, 3, 183/184 y 1029/1049, digitalizadas en el marco de los autos principales a los que corresponde este legajo).





Asimismo, según lo informado por la PROCELAC en el marco de las actuaciones principales a las que corresponde este legajo, la empresa V. F. S.A. se encontraba beneficiada con la reducción de la alícuota del impuesto a los Débitos y Créditos bancarios establecidos por la ley 25.413, no declaró empleados en relación de dependencia ni a sus integrantes de manera correcta, no presentó documentación que permitiera determinar fehacientemente que los depósitos realizados estuvieran relacionados con la actividad que declaró desarrollar (*“venta de comisión de cereales”*), como así también que el perfil de la sociedad en cuestión, es conteste con la utilización de personas jurídicas como vehículo de captación y colocación de activos de terceros. Finalmente, en función de las irregularidades constatadas con relación de la empresa V. F. S.A., se decidió incluir a la misma en la base de datos de contribuyentes apócrifos de A.R.C.A. (confr. fs. 1260/1264 y 1689, de las actuaciones principales a las que corresponden este legajo, digitalizadas en el Sistema de Gestión Judicial Lex 100);

**b)** V. F. S.A. habría recibido dinero de sociedades apócrifas presuntas (como ser A. A. S.A., A. C. S.R.L., A. S.A., BA O. C. S.R.L., C. O. S.R.L., C. S.R.L., D. I. C. S.A., D. E. S.R.L., F. D. B., L. P. C. S.A., P. S.A., S. S.A., T. S. S.A., O. R. Y A. S.R.L., C. C. S.A., C. S. L. S.R.L. y E. L. T. S.R.L., conforme surge del dictamen fiscal obrante a fs. 2183/2191 de las actuaciones principales a las que corresponde este legajo), por servicios que no habría prestado, y por los que habría emitido facturas apócrifas por operaciones comerciales que no fueron concretadas. El dinero en cuestión habría sido depositado en diversas cuentas bancarias abiertas bajo la titularidad de V. F. S.A. (como ser el Banco Itaú, el Banco Patagonia, el Banco HSBC, el Banco Provincia, el Banco Santander Río y el Banco Nación).

Una parte de los fondos depositados en las cuentas corrientes de que se trata, fueron extraídos por caja, mediante cheques librados y cobrados por apoderados de la empresa V. F. S.A. y entregados a personas vinculadas con la misma y, posteriormente, habría sido puesto en circulación a través de maniobras tendientes a impedir el seguimiento del dinero en cuestión (confr. fs. 1634/1639 vta., 1641 y 2173 de las actuaciones principales a las que corresponden a este legajo, digitalizadas en el Sistema de Gestión Judicial Lex 100).







## Poder Judicial de la Nación

Asimismo, según lo sostenido en la consideración 15° de la decisión apelada “...ese dinero de origen ilícito fue puesto en circulación en el mercado a través de las cuentas corrientes bancarias de ‘V. F. S.A.’ durante los años 2012 a 2015...”.

**10°)** Que, por la decisión en crisis también se estimó acreditado en el marco de los autos principales a los que corresponde este legajo que C. G. M., habría sido una de las personas vinculadas con el manejo de la empresa V. F. S.A., ponderándose en particular que aquél:

**a)** fue titular de la dirección de IP N° \*\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*, instalada en el domicilio sito en Av. de Mayo \*\*\*\*, piso 12° de esta ciudad (confr. fs. 1871 de las actuaciones principales a las que corresponde este legajo, digitalizada en el Sistema de Gestión Judicial Lex-100);

**b)** desde la dirección de IP referida precedentemente, se produjo el ingreso al sistema informático de la actual A.R.C.A., entre el 02/06/2011 y el 12/08/2012, a la C.U.I.T. de L. C., y a la clave fiscal de V. F. S.A. (confr. fs. 1252, 1336/1343 y 1369 de las actuaciones principales a las que corresponde este legajo, las cuales se encuentran digitalizadas en el Sistema de Gestión Judicial Lex-100);

**c)** para la facturación del servicio de internet vinculado con la IP mencionada anteriormente, se informó como teléfono de contacto el abonado N° 11-4187-7016, con domicilio de facturación en el domicilio sito en Av. de Mayo \*\*\*\*, piso \*°, oficinas \*\* y \*\* de esta ciudad, abonado que se encontraría vinculado a C. G. M. (confr. fs. 1871, 2174 y 2179 de las actuaciones principales a las que corresponde este legajo, las cuales se encuentran digitalizadas en el Sistema de Gestión Judicial Lex-100);

**d)** con relación a la cuenta corriente N° \*\*\*\*\*/80 del Banco de la Nación Argentina, de titularidad de V. F. S.A., abierta el 22/11/2011, se informó como teléfono de contacto el abonado N° \*\*\*\*-\*\*\*\*, el cual se encontraba vinculado a C. G. M. (confr. fs. 476, 2169/2172 de las actuaciones principales a las que corresponde este legajo y el documento digital titulado “Informe de los Bancos Itaú y Nación.pdf”, los cuales se encuentran digitalizados en el Sistema de Gestión Judicial Lex-100); y

**e)** de la documentación aportada por el Banco Itaú S.A., surge la copia de un balance correspondiente a V. F. S.A. en el cual habría



intervenido C. G. M., en calidad de contador público (confr. el documento digital titulado “Informe de los Bancos Itaú y Nación.pdf”, el cual se encuentra digitalizado en el Sistema de Gestión Judicial Lex-100).

11º) Que, la defensa de C. G. M. no cuestionó la materialidad de los hechos recordados por la consideración 1º de la presente, sino que lo que se cuestionó por el recurso de apelación y por el memorial presentado fue la intervención culpable que en principio se le atribuyó al imputado en los hechos. La parte recurrente negó categóricamente que su asistido hubiera tenido participación en las maniobras que le fueron atribuidas por el juzgado, alegando la ajenidad del mismo en tales sucesos y atribuyendo su vínculo con la empresa V. F. S.A. de manera exclusiva a la actividad profesional de aquél.

12º) Que, contrariamente a lo sostenido por la defensa de C. G. M. por el recurso de apelación interpuesto y por el memorial respectivo, en el sentido de que su intervención se limitó al cumplimiento de un rol profesional, los elementos de prueba aludidos permiten concluir que su actuación habría excedido el ámbito del mero asesoramiento profesional y que habría estado dirigida a realizar aportes imprescindibles para la realización de los ilícitos descriptos.

13º) Que, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que C. G. M. habría sido quien, en su calidad de contador público, habría intervenido en la confección y posterior auditoría del balance de la empresa V. F. S.A., correspondiente al ejercicio fiscal 2009.

Por la Memoria del balance en cuestión, se expresó que durante el ejercicio del que se trata “...se estuvieron haciendo los trámites necesarios a fin de realizar la puesta en marcha de la sociedad...” (confr. el documento digital titulado “Informe de los Bancos Itaú y Nación.pdf”, el cual se encuentra digitalizado en el Sistema de Gestión Judicial Lex 100).

Al respecto, no puede dejar de recordarse que, por pronunciamientos anteriores, este Tribunal ha expresado que la certificación de los balances de la empresa y la auditoría por parte de un contador público nacional supone un control razonable que permita presumir la veracidad de la documentación contable de aquélla y de la actividad que es desarrollada por la sociedad (confr. Regs. 407/05 y CPE 189/2011/13/CA2, res. del 28/12/2016, Reg. Interno N° 809/16 de la Sala “B” de esta Cámara y CPE





## Poder Judicial de la Nación

1414/2015/16/CA2, res. del 25/8/2020, Reg. Interno N° 258/20 y CPE 803/2013/28/CA11, res. del 1/7/2022, Reg. Interno N° 295/2022 de esta Sala “A”).

En tales condiciones, si bien el recurrente sostuvo en relación con el balance aludido precedentemente que esa intervención “...se trata de una actividad normal y habitual de un contador público para con su cliente”, a lo que cabe agregar también que se trataría de una intervención temporalmente anterior al período referido por la consideración 9° “*in fine*” de la presente, los elementos colectados hasta el momento en las actuaciones principales permiten estimar que mediante aquel acto, más allá de la significancia que pretende atribuirle el apelante, se habría dotado de operatividad a la empresa V. F. S.A. y se habría posibilitado la apertura de una cuenta corriente, ante el Banco ITAÚ S.A., donde se recuerda se habría solicitado la reducción de la alícuota correspondiente al Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios, en beneficio de la contribuyente antes referida y respecto de la cual, durante la investigación, se estableció que fue una de las cuentas de titularidad de V. F. S.A. abierta a los fines de canalizar fondos de origen espurio.

14°) Que, también se encuentra demostrado con los alcances exigidos en esta etapa procesal, que el imputado habría tenido vinculación con una de las cuentas corrientes abiertas ante el Banco de la Nación Argentina, cuya titularidad se encontraba a cargo de V. F. S.A.

De la lectura del legajo de apertura de la cuenta corriente N° \*\*\*\*\*/80 del Banco de la Nación Argentina, de titularidad de V. F. S.A., surge informado como teléfono de contacto el abonado N° \*\*\*\*-\*\*\*\*, consignado por una de las personas autorizadas para operar en la misma (A. M., quien prestó la declaración indagatoria en las actuaciones principales y a su respecto el señor magistrado “*a quo*” adoptó el temperamento establecido por el art. 309 del C.P.P.N., el cual se encuentra firme en lo que a dicha decisión respecta). Durante la investigación llevada a cabo en las actuaciones principales, se estableció que el abonado telefónico en cuestión se encontraba vinculado a C. G. M. (confr. fs. 476, 2169/2172 de las actuaciones principales a las que corresponde este legajo y el documento digital titulado “Informe de los Bancos Itaú y Nación.pdf”, los cuales se encuentran digitalizados en el Sistema de Gestión Judicial Lex-100).

Aquella circunstancia adquiere particular relevancia si se tiene en consideración que A. M. también se habría encontrado autorizada a



operar en otras cuentas de titularidad de V. F. S.A. abiertas en diversas entidades bancarias (como ser los bancos Itaú S.A. y HSBC S.A.) y, no obstante, en la única cuenta corriente en la que se consignó como teléfono de contacto al abonado telefónico N° \*\*\*\*-\*\*\*\*, el cual conforme lo expuesto no le pertenecía a la nombrada, fue en aquella que se registró ante el Banco de la Nación Argentina.

En efecto, la referencia de contacto consignada por A. M. ante el Banco de la Nación Argentina, vinculada con C. G. M., no se aprecia como una circunstancia aislada sino que, por el contrario, la misma debe ser analizada en forma conjunta con lo informado en autos por la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina con respecto al análisis del flujo financiero que la empresa V. F. S.A. presentó ante las diferentes entidades bancarias con las que operó, por el cual se concluyó que el Banco de la Nación Argentina resultó la entidad en la cual se produjo “...*el mayor volumen de transacciones por la cantidad de cheques depositados en su Cuenta...*” (confr. fs. 1634/1639 vta. que se encuentran digitalizadas en el marco de las actuaciones principales a las que corresponde este legajo).

**15º)** Que, tampoco puede dejar de ponderarse que desde la I.P. \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*, cuya titularidad se encontró asignada a C. G. M., de acuerdo con lo expresado por la consideración **10º**, acápite **b** de la presente, se registraron ingresos al sistema informático de A.R.C.A. tanto con relación a la C.U.I.T. de L. C. (quien se recuerda sería la persona titular del D.N.I. adulterado presuntamente que fue utilizado para la constitución irregular de la empresa V. F. S.A.), como así también con respecto a la C.U.I.T. de la citada contribuyente.

La periodicidad de los ingresos verificados con relación al sistema del organismo recaudador mediante los usuarios a los que se hizo alusión precedentemente, como así también el tipo de operaciones que habrían sido realizadas mediante los accesos de los que se trata (por ejemplo, se destacan aquellas que surgen del informe agregado a fs. 1760/1764 vta. de las actuaciones principales y que se identifican como “*autenticación exitosa*”, “*cambio de contraseña*”, “*ingreso al sistema mis retenciones*”, “*ingreso al sistema padrón*” e “*ingreso al sistema oncca*”, entre otras), impiden receptar favorablemente las argumentaciones de la parte recurrente vinculadas con que tales ingresos constituirían un simple





## Poder Judicial de la Nación

*“...acto propio y necesario incluso para la actividad de contador Público” y que la intervención de C. G. M. “fue muy anterior a los períodos investigados”.*

Por el contrario, aquellas circunstancias, aunadas a lo expresado por las consideraciones que anteceden, otorgan sustento a las conclusiones efectuadas por el señor magistrado de la instancia previa, que se vinculan con que C. G. M. habría tenido un rol en el *“manejo operativo concreto de ‘V. F. S.A.’”*, por lo que la ajenidad a los hechos afirmada por la parte recurrente, en el contexto probatorio al que se viene haciendo referencia precedentemente, y de acuerdo a los principios de la sana crítica racional y a los alcances valorativos exigidos en esta etapa del proceso, no puede ser admitida.

**16º)** Que, en función de lo expuesto precedentemente, carece de relevancia lo manifestado por la parte recurrente en cuanto a que C. G. M. *“...No percibió dinero alguno, no intervino ni tiene relación con las personas físicas o jurídicas que depositaron los cheques en las cuentas de V. F., no cobró ningún cheque que supuestamente se intentó blanquear... no tiene vinculación con ninguna de las personas físicas o jurídicas intervinientes en la facturación estimada apócrifa...”*, por cuanto, con independencia de la relevancia penal que corresponda eventualmente atribuir a los comportamientos presuntos que terceras personas hayan podido desarrollar en torno a los sucesos de que se trata, en el caso, conforme lo expresado previamente, se verificarían circunstancias que, de todas formas, evidenciarían que C. G. M. habría cumplido una función preponderante en el obrar ilícito comprobado, por lo que se aprecia que la conclusión a la cual se arribó por el pronunciamiento recurrido, en cuanto a que el nombrado habría actuado de un modo que se adecuaría a los tipos penales involucrados, no resulta irrazonable y se ajusta, en principio, a las constancias obrantes actualmente en los autos principales.

**17º)** Que, con relación a lo manifestado por la parte recurrente en cuanto a que los montos involucrados en el caso, *“...se encuentran por debajo del umbral punitivo establecido por la Ley 27739...”*, toda vez que de la lectura del monto al que se alude por la consideración 1º de la decisión apelada, el cual ascendería a la suma de ochenta y ocho millones doscientos ochenta y tres mil novecientos treinta y tres pesos -\$ 88.283.933- (se recuerda, aspecto no cuestionado por la defensa de C. G. M. y que surge de



la sumatoria de las acreditaciones bancarias registradas por la empresa V. F. S.A. durante los años 2012 a 2015 consignadas en el informe efectuado por la la División Regional Centro de la A.R.C.A., de fs. 2708/2710 de la documentación digitalizada e identificada como “caja2 cuerpo principal 14”, dentro del Sistema de Gestión Judicial Lex-100), se desprende que el mismo supera, a la fecha actual la condición objetiva de punibilidad incorporada en el art. 303 del Código Penal por la ley 27.739 que fue publicada en el Boletín Oficial el día 15/3/2024, la pretensión del recurrente carece de sustento objetivo en las constancias de la causa principal.

18º) Que, en consecuencia, la decisión del juzgado “*a quo*” de dictar el auto de procesamiento de C. G. M., en orden a su intervención en los hechos descriptos por la consideración 1º de la presente, resulta ajustada a derecho y lo que surge de la causa principal, por lo que debe ser confirmada.

19º) Que, por lo demás, sin perjuicio de la necesidad eventual de producir alguna prueba, y por los resultados que aquella pudiera traer aparejados en el futuro, no pueden soslayarse las conclusiones expresadas por los considerandos anteriores -que se basan en las constancias que actualmente se encuentran incorporadas a la encuesta- ni se impide adoptar el temperamento que se establece por el art. 306 del ordenamiento adjetivo, pues por aquel ordenamiento se prevé el carácter provisorio, revocable y reformable del auto de procesamiento (art. 311 del C.P.P.N.), precisamente para que el juez pueda ponderar aquellas circunstancias futura en el supuesto en que se produjesen (confr. Regs. Nos. 1036/05, 132/08, 7/11, 379/11, 703/11, 161/12, 273/15 y 167/16, entre muchos otros, de la Sala “B” de esta Cámara).

En este sentido, este Tribunal ha establecido: “...*para el dictado del auto de procesamiento se requieren elementos de prueba por los cuales, al menos, se permita corroborar la existencia de un estado de probabilidad con respecto a la comisión del delito investigado, y a la participación culpable de los indagados por aquel hecho...*” (confr. CPE 1804/2018/3/CA2, res. del 29/12/2020, Reg. Interno N° 432/20, entre otros, de esta Sala “A” y Regs. Nos 606/10 y 237/15, entre otros, de la Sala “B” de esta Cámara).





## Poder Judicial de la Nación

20º) Que, con relación al embargo dispuesto sobre los bienes de C. G. M., corresponde indicar que por el considerando 32º de la resolución recurrida, el juzgado de la instancia anterior expresó los motivos en función de los cuales estableció el monto por el cual se dispuso el mismo y la parte recurrente no logró demostrar la improcedencia concreta de la medida cautelar en cuestión ni el desajuste de aquélla de acuerdo con las eventuales y diversas obligaciones previstas por el art. 518 del C.P.P.N.

Por lo tanto, corresponde confirmar también la resolución recurrida en relación con la decisión de trabar embargo sobre los bienes de C. G. M., por la suma que se hizo por la decisión cuestionada.

Por ello, **SE RESUELVE:**

**I. CONFIRMAR** la resolución recurrida.

**II. CON COSTAS** (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y devuélvase.

Firman los suscriptos, atento la actual integración de esta Sala (confr. Res. N° 11/2025 de Superintendencia de esta Cámara).

ROBERTO ENRIQUE HORNOS  
JUEZ DE CAMARA

CAROLINA L.I. ROBIGLIO  
JUEZ DE CAMARA

ANTE MÍ:

NATALIA MARIEL ETCHETO  
SECRETARIA DE CAMARA

